

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  
DEL VALLE DEL CAUCA

Auto Interlocutorio

PROCESO No. 76001-23-33-000-2020-00243-00  
DEMANDANTE: MARTHA LUCIA ALVAREZ CASTAÑO  
DEMANDADO: EFRAÍN ROJAS DONCEL- PERSONERO MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA.  
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL  
INSTANCIA: PRIMERA

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

Santiago de Cali, veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021)

Vencido el termino de contestación de la demanda y el traslado de las excepciones, de conformidad con lo preceptuado en el inciso 2° del artículo 12 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y encontrándose el expediente para fijar fecha para llevar a cabo audiencia inicial, se observa que en la contestación de la demanda el Concejo Municipal de Guadalajara de Buga y el señor EFRAIN ROJAS DONCEL en su calidad de Personero de Buga elegido y demandado, propusieron la excepción previa denominada “inepta demanda”, las cuales no requieren la práctica de pruebas, la cual se procede a resolver.

ANTECEDENTES

LA DEMANDA.

La señora **MARTHA LUCIA ALVAREZ CASTAÑO** presentó demanda electoral solicitando la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 007 del 13 de enero de 2020, mediante la cual “se reconoce y se nombra personero de la ciudad de Guadalajara de Buga, periodo 2020-2024 al señor EFRAIN ROJAS DONCEL, con fundamento en irregularidades relacionadas con la práctica de la entrevista.

EXCEPCIÓN.

El Concejo Municipal de Guadalajara de Buga propuso la excepción previa de inepta demanda, con fundamento en que el concurso de méritos se ciñó enteramente a las reglas del concurso y en concreto con relación a los cargos fundamento de la acción electoral relacionadas con la entrevista, aduciendo que este tipo de actos no son actos administrativos susceptibles de control jurisdiccional, señalando: la demanda se “centra entre otros temas en la **práctica de la prueba de la entrevista**, que como bien se dijo en

*precedencia correspondió al concejo electo para el periodo 2020-2024, lo que de suyo no pudo desvirtuar la actora, convirtiéndose en una inepta demanda”.*

Por su parte, el demandado el señor Efraín Rojas Doncel, Personero Municipal de Buga propuso igualmente la excepción de inepta demanda por inadecuada escogencia del medio de control y uso de daño antijurídico como causal de nulidad electoral por considerar a partir de la legalidad de la expedición del acto demandado, que la acción electoral no es el medio de control adecuado, de conformidad con el artículo 139 del CPACA, toda vez que lo que pretende la demandante es obtener un restablecimiento del derecho que no se ajusta a ninguna de las causales del artículo 275 del CPACA y finalmente porque si el cuestionamiento es el acto de entrevista, este también se ciñó a la legalidad y no se podía utilizar como causal de nulidad electoral del acto.

### **CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS**

De conformidad con la Ley 1437 de 2011 las excepciones previas deben resolverse en la audiencia inicial de que trata el artículo 181 de dicha norma, en aplicación por remisión normativa al medio de control electoral. Sin embargo, el inciso 2° del artículo 12 del Decreto Legislativo 806 de 2020 ordena resolver las excepciones previas que no ameriten la práctica de pruebas antes de la audiencia inicial.

Visto lo anterior, se observa que por diferentes vías la parte pasiva de la presente acción cuestionan la procedencia del medio de control electoral para resolver el presente asunto, por cuanto en el caso del Concejo se afirma que se está cuestionando el acto de la entrevista, acto de trámite por excelencia y en el caso del Personero elegido por la misma razón al invocarse como causal de nulidad genérica contra dicho acto y que en ultimas se buscaría un restablecimiento del derecho.

Para el efecto se debe señalar lo siguiente:

La debida escogencia del medio de control es un requisito sustancial de la demanda, la cual su inobservancia deprecia el rechazo de la demanda o en su defecto y en el evento de no advertirse en la etapa pertinente conllevaría emitir un fallo inhibitorio.

El Artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 señala:

*“Nulidad electoral.* Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.

En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar

en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección.

En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998”.

Por su parte, el Artículo 275, señala:

*Causales de anulación electoral.* Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además:

5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.

El Consejo de Estado sobre como distinguir este tipo de controversias ha dicho<sup>1</sup>:

*“(…) Uno de los objetivos principales del legislador al expedir la Ley 1437 de 2011 fue, entre otros, definir expresamente cuando debía utilizarse una u otra de las herramientas judiciales con las que la jurisdicción contenciosa cuenta para controlar las decisiones adoptadas por la administración<sup>2</sup>.*

*Para cumplir tal cometido, el principal cambio que se introdujo en el CPACA fue el de eliminar la diferencia entre acción y pretensión, debido a que se entendió que la acción es una sola y que lo que diferencia los distintos medios de control es la pretensión de la demanda y el acto que se controvierte. Por ello, contrario a lo que ocurría en el derogado Decreto 01 de 1984, la Ley 1437 de 2011 estipuló de, forma expresa, cuáles son los actos controvertibles a través de cada medio de control así:*

Medio de Control	Acto que se puede cuestionar
Nulidad  - artículo 137-	Actos generales y particulares solo en los eventos previstos en el artículo 137 del CPACA.
Nulidad y Restablecimiento  -artículo 138-	Actos de carácter particular y concreto
Nulidad Electoral  - artículo 139-	Actos Electorales: <ul style="list-style-type: none"><li>• Elección</li><li>• Nombramiento.</li><li>• Llamamiento a proveer vacantes.</li></ul>

<sup>1</sup> Ver CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN QUINTA. Consejero Ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO. 30 de agosto de dos mil dieciocho (2018). Rad. No. 25000-23-41-000-2018-00165-01.

<sup>2</sup> En la exposición de motivos de la Ley 1437 de 2011 se precisó que las finalidades de la comisión redactora del CPACA eran “1. Revisar y proponer la actualización del conjunto normativo referente a la actividad administrativa y los procedimientos utilizados por la administración pública, de acuerdo con la Constitución Política de 1991 y con las realidades socioeconómicas del nuevo modelo de estado y de la administración. 2. Redefinir el objeto de la jurisdicción contencioso-administrativa, las clases de acciones y procesos y los poderes del juez conforme con las exigencias constitucionales y las transformaciones institucionales, de manera que se pueda controlar eficazmente la legalidad de las actuaciones de la administración, al tiempo que se garantizan los derechos de los administrados, en el marco de una tutela judicial efectiva. 3. Incorporar como legislación las doctrinas jurisprudenciales ya decantadas y pacíficas en todos los asuntos y materias que competen a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 4. Fortalecer tanto en la regulación de la actuación administrativa como en la del proceso contencioso-administrativo, la utilización de nuevas tecnologías, con el objetivo de hacerlos eficientes y facilitar a los usuarios el acceso a las autoridades y a la administración de justicia. 5. Definir los elementos de la oralidad en el proceso contencioso-administrativo, en desarrollo de lo previsto en el artículo 1° de la Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reformó la Ley Estatutaria de la Justicia, ley 270 de 1996. 6. Consagrar los mecanismos y recursos de unificación de la jurisprudencia por el Consejo de Estado, como órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” (resalta el Despacho) En Gaceta del Congreso 1173 de 17/11/2009 disponible en [http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar\\_documento?p\\_tipo=1136&p\\_numero=198&p\\_consec=24362](http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=1136&p_numero=198&p_consec=24362) consultado el 23 de agosto de 2018.

<p>Nulidad por Inconstitucionalidad</p> <p>-artículo 135-</p>	<p>-Decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional.</p> <p>- Actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.</p>
---	--

Como puede observarse, a partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011 lo que determina la procedencia de uno u otro medio de control es **la naturaleza del acto acusado**, de forma que este debe ser el parámetro a tener en cuenta para establecer si el medio de control escogido por la parte actora fue el idóneo o; si por el contrario, atañe al juez, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 171 ibídem, adecuarla, si ello es posible, al trámite correspondiente.

El artículo 139 del CPACA establece que el medio de control de nulidad electoral procede contra actos electorales, los cuales según lo ha entendido esta Sección son aquellos emanados del ejercicio de la función electoral<sup>3</sup>, la cual es distinta de la función administrativa, y por ello, estos deben entenderse como **autónomos, especiales y distintos del acto administrativo**, comoquiera que el acto electoral tiene su origen en la materialización de la democracia participativa y el derecho a elegir y ser elegido que consagra la Carta Política.

Ahora bien, según las voces de la disposición objeto de estudio existen, si se quiere, 4 clases de actos electorales a saber: i) elección popular; ii) elección a cargo de cuerpo colegiado; iii) nombramiento y iv) llamamiento a proveer vacantes, los cuales se pueden distinguir de la siguiente manera:

i) El originado en **la elección popular**, la cual está precedida por voto popular y cuyo acto constituye, por su naturaleza, la expresión más directa de la democracia, pues materializa la voluntad del electorado en la designación de los dignatarios del Estado que se someten a esa forma de escogencia. Un ejemplo de esta clase actos son las designaciones hechas para elegir alcaldes, congresistas, etc.;

ii) El acto de **llamamiento**, que se utiliza para proveer curules ante las vacancias temporales o absolutas que se generen al interior de una corporación pública de elección popular y que son ocupadas por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral;

(iii) El de **elección por cuerpos colegiados** a través del cual, en aplicación del sistema de pesos y contrapesos, se designan servidores públicos, en los diferentes niveles nacional y territorial; y

(iv) Los **actos de nombramiento**, a través de los cuales se proveen los diversos cargos de la función pública a efectos de que el designado adquiera la categoría de servidor público. Así pues, la Sección Segunda de esta Corporación frente a esta clase de acto ha entendido que:

“Respecto a la naturaleza jurídica del acto de nombramiento, esta Corporación<sup>4</sup> ha señalado que se trata de un acto condición que está sujeto a la verificación de unos presupuestos legales que conducen a formalizar el nombramiento y a completar la investidura de servidor.”<sup>5</sup>

Es de advertir que aunque los actos de nombramiento son expresión propia de la función administrativa, **como el legislador los enlistó como acto electoral la Sala los conoce como tal**, pese a que no responden a la lógica de la función electoral. Ahora bien, debido a esta “doble naturaleza” que el ordenamiento jurídico quiso asignarle al acto de nombramiento, la Sala Electoral ha establecido que, aquel, en principio, puede controlarse mediante dos vías distintas, dependiendo de la pretensión de la demanda.

**Así las cosas, será procedente la nulidad electoral “cuando la pretensión es discutir la legalidad del acto declaratorio de elección o acto electoral propiamente dicho y, la nulidad y**

<sup>3</sup> Sobre la distinción entre función administrativa y función electoral consultar entre otros: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de junio de 2015, radicación 11001-03-28-000-2015-00051-00 CP. Alberto Yepes Barreiro. Ddo. Oneida Pinto- Gobernadora de La Guajira; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicación 11001-03-28-000-2014-00110-00 CP. Alberto Yepes Barreiro. Ddo. Cámara de Magdalena; y Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de 3 de junio de 2016, radicación 13001-23-33-000-2016-00070-01 C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Demandados: concejales de Cartagena. Sección Quinta, Auto de Ponente de 26 de septiembre de 2017, radicación 11001-03-26-000-2017-00087-00 C.P. Alberto Yepes Barreiro y Sección Quinta, Auto de Ponente de 9 de mayo de 2018, radicación 11001-03-28-000-2018-00009-00 C.P. Alberto Yepes Barreiro.

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de julio de 2011, Consejero ponente Gustavo Gómez Aranguren, número interno 1997-2009: ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 9 de agosto de 2007, Consejero Ponente Alfonso Vargas Rincón, número interno: 0905-2005.

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de septiembre de 2017, radicación 54-001-23-33-000-2012-00114-01 CP. William Hernández Gómez.

restablecimiento del derecho, cuando el propósito pretensional sea la obtención de un restablecimiento, expreso si se solicita por postulación de parte, o tácito, implícito o automático, cuando del planteamiento de la causa petendi así se advierta.”<sup>6</sup>

Por supuesto, en cada caso se deberán cumplir los presupuestos propios de caducidad, legitimación, los requisitos de procedibilidad, y demás presupuestos procesales para la procedencia de cada medio de control, sin que la escogencia de uno u otro dependa del arbitrio del actor, sino de sus pretensiones quienes serán las que determinaran cuando se puede activar uno y otro camino.

(...)

Revisada la demanda, se observa que la pretensión de la misma se limita a solicitar la anulación del acto de nombramiento del demandado por la supuesta ausencia de requisitos para acceder al cargo, sin que de dicha petición se desprenda restablecimiento automático para la demandada, ni para terceros, no solo porque el cargo que se proveyó es de libre nombramiento y remoción, sino porque, además, no está demostrado que la demandante haga parte de la entidad que profirió el acto acusado o se encuentre dentro de su planta de personal.

En este contexto, y como se observa que con la demanda se busca únicamente un control abstracto de legalidad del acto acusado, sin que se genere algún tipo de restablecimiento tácito o implícito para la señora Aleyda Murillo Granados o algún tercero, la Sala estima que la validez de la Resolución N° 2471 de 29 de diciembre de 2017 sí puede controvertirse mediante el medio de control de nulidad electoral.

(...)” (Negrillas y Subraya la Sala.

Por otra parte, en lo relacionado a actos de trámite o de contenido electoral y actos electorales expuso<sup>7</sup>:

“2. Dentro de la categoría de actos generales se encuentra el acto de contenido electoral que contiene una decisión administrativa abstracta e impersonal, pero que afecta o condiciona la expedición del acto electoral. En este orden de ideas, se impone también establecer las principales diferencias que existen entre el acto electoral y el acto de contenido electoral.

3. **Ello implica que el acto de contenido electoral, que depende del procedimiento señalado en la ley, es un acto preparatorio o de trámite para el acto electoral, demandable cuando sea expedido el acto electoral, por medio de la nulidad electoral.** El acto general es demandable por regla general mediante la simple nulidad. Ello implica la necesidad de revisar en cada caso el marco normativo.

4. Al respecto, se tiene que la Sala Plena de esta Corporación, en auto del 9 de julio de 1997, expuso las diferencias existentes entre acto electoral y acto de contenido electoral “...como aquellas **manifestaciones de voluntad administrativa que se dictan en desarrollo de la legislación electoral**, en orden a perfeccionar el proceso y la organización electorales para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la votación del elector expresada en las urnas, y a los ciudadanos el derecho de organizarse en partidos y movimientos políticos, en los términos de la Constitución y la ley, y ejercer a través de ellos sus derechos”<sup>2</sup>.

En la misma providencia, se destacó que **los actos electorales son aquellos que declaran una elección o que realizan un nombramiento o designación**, cuya legalidad se cuestiona vía acción de nulidad electoral.

Por su parte, la Sección Quinta<sup>3</sup>, en auto del 9 de marzo de 2012<sup>4</sup>, precisó:

“Los actos electorales corresponden a aquellas decisiones administrativas por medio de las cuales se declara una elección o se hace un nombramiento o designación, según se infiere del régimen general de competencias establecido en el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, los actos de contenido electoral, que por obvias razones no pueden equipararse a los actos electorales, sí se pueden identificar por su estrecha relación con uno de estos actos, es decir que el acto viene a ser de contenido electoral, no porque con el mismo se asuma una

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de sala del 30 de junio de 2016, radicación 68001233300020160048401 CP. Lucy Jeannette Bermudez. Ddo. Robiel Barbosa Otálora – Personero Municipal de Floridablanca.

<sup>7</sup> CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN QUINTA. Consejera Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE. Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). Rad. No.: 11001-03-28-000-2018-00134-00. Demandante: GUSTAVO GALLON GIRALDO y JOSÉ LUCIANO SANÍN VÁSQUEZ. Demandado: CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

decisión administrativa de elección o de nombramiento, sino porque la decisión administrativa afecte de alguna manera a un acto de esa estirpe, bien porque lo revoque, modifique o sujete a alguna condición que antes no tenía, es decir que el acto llega a ser de contenido electoral porque jurídicamente tiene alguna incidencia en uno que sí tiene naturaleza electoral. Con todo, el acto de contenido electoral no se agota en la anterior clasificación, pues bajo la premisa de que esa naturaleza se la confiere su proximidad jurídica con un acto de elección o de nombramiento, también resulta válido afirmar que dentro de ese catálogo se incluyen los actos administrativos de carácter general por medio de los cuales la administración pública regula o reglamenta un proceso de elección o de nombramiento”. (Negrilla fuera de texto).

En conclusión, el acto electoral es aquel por medio del cual se declara una elección o hace un nombramiento o una designación. Por ejemplo, actos de elección popular, los de elección por corporaciones electorales, los actos de nombramiento de cualquier autoridad pública y los de llamamiento para suplir vacantes en las Corporaciones públicas. Por su parte, los actos de contenido electoral son aquellos que tienen la virtualidad de influir en la decisión de elección, nombramiento o designación que se realiza<sup>5</sup>.

Para determinar si el contenido del acto demandado es electoral, la Sección ha fijado que un acto cumple con dicha naturaleza cuando: “(i) establecen los parámetros generales para una elección -actos de convocatoria-, (ii) otorga o elimina la personería jurídica de un partido o movimiento político, (iii) se registra o niega la inscripción del logo-símbolo de una colectividad política, (iv) se desarrollan los mecanismos de participación ciudadana, (v) **se establecen las reglas sobre las elecciones**, lo que en general aplica a (vi) los actos profiera la organización electoral<sup>6</sup>”.

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que el acto demandado es la Resolución No. 007 del 19 de julio de 2018, “Por medio de la cual se efectúa una convocatoria pública y se selecciona una institución de educación superior que adelante la convocatoria para elegir al Contralor General de la República para el periodo 2018-2022”, no cabe duda de que establece reglas para las elecciones y por tanto ostenta la categoría de acto de contenido electoral.”(negrillas fuera de texto).

En otra oportunidad expuso:<sup>8</sup>

“Ahora bien, podría pensarse que al ser los actos expedidos en ejercicio de la función electoral distintos a los actos administrativos, cuyo origen es la función administrativa, no es aplicable la distinción antes anotada. No obstante, los actos expedidos en función electoral también pueden clasificarse en actos de trámite y actos de definitivos.

Así pues, **en asuntos electorales el acto que contiene la decisión definitiva del electorado es el tendiente a elegir, nombrar o llamar a proveer vacantes, los cuales se constituyen como verdaderos actos electorales, en los términos del inciso primero del artículo 139 del CPACA, pasibles de ser controlados, únicamente, por la vía de la nulidad electoral según las voces de la norma en comento.**

**Por el contrario, serán actos de trámite o preparatorios todos aquellos proferidos en el devenir del procedimiento electoral, distintos de los de elección, nombramiento o llamamiento y los cuales no son pasibles de control judicial de forma autónoma.”**

En efecto, **lo que ocurre es que los actos de trámite o preparatorios serán controlados al examinar el acto definitivo.** Así lo ha colegido la Sección Quinta en diversas oportunidades, en la que ha controlado los actos que precedieron a la elección cuando estudia los cargos de la demanda que se presenta contra la designación.”

(...)

“Así mismo, ha señalado que “(...) el acto electoral es aquel por medio del cual la Administración declara una elección o hace un nombramiento o una designación (actos de elección popular, los de elección por corporaciones electorales, los actos de nombramiento de cualquier autoridad pública y los de llamamiento para suplir vacantes en las Corporaciones públicas). Por su parte, los actos de contenido electoral son aquellos que tienen la virtualidad de influir en la decisión de elección, nombramiento o designación que realiza el ente administrativo.”

---

<sup>8</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Consejera Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) Rad. No.: 11001-03-28-000-2018-00134-00.

***Lo anterior implica que es el acto electoral el susceptible de control por medio de la nulidad electoral y los actos de trámite y/o preparatorios son demandables por este mismo medio de control, pero de manera indirecta.” (negritas fuera de texto).***

Entonces, extrapolado lo anterior al presente caso la Sala considera que en el presente la demandante al solicitar como pretensión la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 007 del 13 de enero de 2020, mediante la cual “se reconoce y se nombra como personero de la ciudad de Guadalajara de Buga, periodo 2020-2024 al señor EFRAIN ROJAS DONCEL, acto electoral por excelencia, el medio de control procedente es el electoral, cosa distinta es que funde la misma en las presuntas irregularidades del acto de contenido electoral que condiciona la expedición del acto electoral (entrevista), que como se observó si bien es un acto de trámite y/o preparatorio, es demandable por este mismo medio de control, pero de manera indirecta o con fundamento en causales genéricas de violación, como sería la vulneración de normas en que debía fundarse o desviación de poder, pero que en modo alguno descartaría la procedencia de este medio de control .

Ahora bien, revisada la demanda se constata que ni tacita ni implícitamente la actora exige un restablecimiento concreto, sino que funda la misma en la necesidad del control abstracto del acto de elección del personero, en esa medida se concluye que el medio de control que nos atañe es el adecuado para verificar la legalidad de este.

Finalmente, se debe señalar que el Consejo de Estado en un caso análogo como este, estudió la legalidad de la elección de los personeros a través del medio de control electoral.<sup>9</sup>

Así las cosas, se declarará no probada la excepción previa formuladas por el Concejo Municipal de Buga y el señor Efraín Rojas Doncel Personero Municipal de Buga elegido.

En mérito de lo expuesto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sala de Decisión,

## **RESUELVE**

**PRIMERO. – DECLARAR NO PROBADA** la excepción previa de *Inepta Demanda*, propuestas por el Concejo Municipal de Buga y el señor Efraín Rojas Doncel Personero Municipal de Buga, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO. – Ejecutoriado el presente auto, CONTINUAR** de forma inmediata con el curso del proceso.

## **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

---

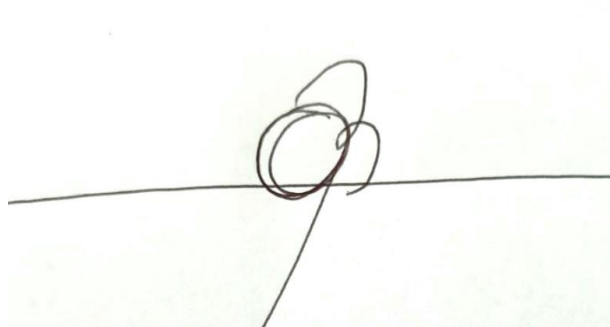
<sup>9</sup> SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Rad. No.: 25000-23-41-000-2016-00219-01 Actor: MARÍA ESTHER PINTO ESCOBAR Demandado: RICARDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÁRDENAS –PERSONERO MUNICIPAL DE SOACHA– . Asunto: Nulidad Electoral – Sentencia de segunda instancia.

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a long, sweeping stroke that extends downwards.

**JHON ERICK CHAVES BRAVO**  
Magistrado

A complex, stylized handwritten signature in black ink, with multiple loops and a horizontal stroke that crosses the signature.

**FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ**  
Magistrado

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a circular flourish above it and a diagonal stroke extending from the bottom.

**RONALD OTTO CEDEÑO BLUME**  
Magistrado